Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México; de fecha diecinueve (19) de junio de dos mil veinticuatro.

**VISTO** el expediente electrónico formado con motivo del recurso de revisión **01373/INFOEM/IP/RR/2024**, interpuesto por **XXX XXX**, en lo sucesivo la **RECURRENTE**, en contra de la respuesta del **Ayuntamiento de San Felipe del Progreso**, en adelante el **SUJETO OBLIGADO**,se procede a dictar la presente resolución, con base en los siguientes:

# **A N T E C E D E N T E S**

1. El **siete (07) de marzo de dos mil veinticuatro**, la particular presentóa través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), la solicitud de información pública registrada con el número **00019/FELIPRO/IP/2024,** en la que requirió lo siguiente:

*“Copia del CERTIFICADO PARCELARIO 0 SUPERFICIE DE HECTARIAS Y QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO DE SAN JERONIMO BONCHETE, MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, ACREDITA CERTIFICADO PARCELARIO EN ORIGINAL EXPEDIDO POR EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL.”* (Sic).

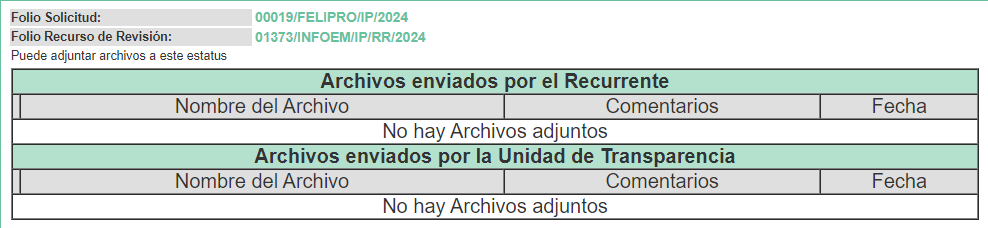
1. Se hace constar que el particular señaló como modalidad de entrega de la información: ***A través del SAIMEX***.
2. El **once (11) de marzo de dos mil veinticuatro**, el **SUJETO OBLIGADO** dio respuesta a la solicitud de información en los siguientes términos:

*“En seguimiento y atención de su petición, presentada mediante el Sistema de Control de Solicitudes de Información del Estado de México (SAIMEX). Con fundamento en el artículo 12 y 167 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, a su pedimento me permito informarle que usted puede obtener el documento que solicita a través del Registro Agrario Nacional, puede consultar los requisitos y procesos del tramite en el siguiente link: https://www.gob.mx/tramites/ficha/solicita-ante-el-ran-la-reposicion-de-tus-certificado-en-caso-de-la-perdida-o-extravio/RAN2342 Así mismo, informarle que este ayuntamiento no emite dicha información. Con base en lo anterior reciba un cordial saludo.”* (Sic.)

1. Adjunto al acuse de respuesta, el **SUJETO OBLIGADO** entregó a el particular un archivo electrónico, cuyo nombre y contenido se resume a continuación:
   1. ***“null.pdf”***: Documento consistente en una foja en blanco, sin ningún tipo de contenido.
2. El **once (11) de marzo de dos mil veinticuatro**, la particular interpuso el recurso de revisión **01373/INFOEM/IP/RR/2024**; impugnación en la que refirió lo siguiente:

* **Acto impugnado:** “*NO ENTREGO NINGUNA RESPUESTA ESCRITA POR SU UNIDAD DE TRANSPARENCIA”* (Sic).
* **Razones o motivos de inconformidad:** *“CERO RESPUESTA”* (Sic)

1. Se registró el recurso de revisión bajo el número de expediente **01373/INFOEM/IP/RR/2024**; asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 185, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios se turna a la **Comisionada María del Rosario Mejía Ayala**, para su análisis.
2. La Comisionada Ponente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 185, fracción II, de la Ley de la materia, a través del acuerdo de admisión de **diecinueve (19) de marzo de dos mil veinticuatro**, puso a disposición de las partes el expediente electrónico vía SAIMEX, a efecto de que en un plazo máximo de siete días manifestara lo que a derecho conviniera, ofreciera pruebas y alegatos según corresponda a los casos concretos, de esta forma para que el **SUJETO OBLIGADO** presentará su Informe Justificado procedente.
3. De las constancias que obran dentro del expediente digital formado en el SAIMEX, se advierte que el **SUJETO OBLIGADO** no presentó su informe justificado para confirmar, modificar o revocar su respuesta original; en el mismo sentido, el **RECURRENTE** omitió el presentar cualquier tipo de alegatos o manifestaciones. Se adjunta la captura del apartado de *Manifestaciones* como referencia:



1. El **seis (06) de junio de dos mil veinticuatro**, con fundamento en el artículo 181, tercer párrafo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios se notificó que el plazo de 30 días para resolver el recurso de revisión sería ampliado por un periodo de 15 días hábiles adicionales.
2. Este Organismo Garante no pasa por alto explicar que, la dilación en la resolución del presente asunto, encuentra justificación en que el alto número de recursos de revisión recibidos ha incrementado el número de medios de impugnación que deben resolverse por este Instituto; circunstancia atípica que ha rebasado las capacidades técnicas y humanas del personal encargado de la proyección de las resoluciones a dichos medios de impugnación.
3. Por ello, es menester precisar que si bien se ha excedido el plazo para resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con la Ley de la materia, dicha dilación es de carácter excepcional y se encuentra justificada en los elementos para medir la razonabilidad del plazo de resolución de asuntos conforme a los parámetros establecidos por diversos órganos jurisdiccionales federales, aplicables también en procedimientos análogos, como el que nos ocupa.
4. Así, en términos de lo que establecen los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los recursos deben ser sencillos y resolverse en el menor tiempo posible, tomando en consideración la dilación total del procedimiento; esto es, en un plazo razonable.
5. En ese sentido, el Legislador fijó los términos procesales en las leyes, de manera general, sin que pudiera prever la variada gama de casos que son resueltos por los órganos jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales, tanto por la complejidad de los hechos, como por el número de casos que conocen.
6. Por ello, excepcionalmente, si un asunto es resuelto con posterioridad a los plazos señalados por la norma debe analizarse la razonabilidad de dicha dilación atendiendo a los siguientes criterios:
   1. **Complejidad del asunto:** La complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales, el tiempo transcurrido, las características y contexto del recurso.
   2. **Actividad Procesal del interesado:** Acciones u omisiones del interesado.
   3. **Conducta de la Autoridad:** Las Acciones u omisiones realizadas en el procedimiento. Así como si la autoridad actuó con la debida diligencia.
   4. **La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso:** Violación a sus derechos humanos.
7. De modo que, cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien, cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional o cuasi jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que es una excluyente de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario, como ha acontecido en el caso que nos ocupa.
8. Argumento que encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 32/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro *“TÉRMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUÓ INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERÓ EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO.”[[1]](#footnote-1)*, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación con el registro digital 205635.
9. Razones por las cuales cabe concluir que, la resolución al recurso de revisión se solventa hasta esta fecha, debido a que existe una excesiva carga de trabajo en desproporción a la capacidad de los recursos materiales y humanos con que cuenta este Instituto para atender la enorme demanda de usuarios que acuden para que se les garantice su Derecho de acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, aunado a la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente, la extensión de los escritos y pruebas aportadas y desahogadas por las partes; lo que impide la tramitación de los recursos dentro de los términos legales previamente establecidos por la Ley, por tratarse de causas de fuerza mayor.
10. Al respecto, también son de considerar los criterios sostenidos por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyos rubros y datos de identificación son los siguientes:

***PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO.*** *“A partir de la vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros ordenamientos internacionales, el Estado Mexicano cuenta con un catálogo de derechos y garantías que vinculan normativamente, y permite salvar situaciones que diversas leyes plantean, partiendo de la dimensión objetiva que esos derechos ejercen sobre todo el orden jurídico, tomando en cuenta que el plazo previsto en las leyes para resolver un asunto pudiera no corresponder a la realidad, siendo factible acudir, en tal supuesto, a los ordenamientos internacionales a fin de establecer el contenido del concepto de "plazo razonable" conforme a las particularidades del caso; más aún, un criterio de razonabilidad y justificación de eventuales demoras, aplicando directamente los artículos 8 y 25 de la aludida convención, permiten configurar un proceso justo o una tutela judicial efectiva. Así, el concepto de "plazo razonable" es aplicable a la solución jurisdiccional de una controversia, pero también a procedimientos análogos, lo que a su vez implica que haya razonabilidad en el trámite y en la conclusión de las diversas etapas del procedimiento que llevarán al dictado de sentencias definitivas o proveídos, así como de diligencias en la ejecución de los fallos judiciales, lo que se relaciona con el comportamiento de las autoridades competentes a fin de justificar el exceso de la duración de las causas, que generalmente aducen sobrecarga de trabajo, reflexionando que, una de las atenuantes para tal cuestión, consiste en que dichas autoridades demuestren haber adoptado las medidas pertinentes a fin de aminorar sus efectos; sin embargo, cuando esa sobrecarga ha dejado de tener el carácter de excepcional y adquiere el de estructural, entonces las dilaciones en el procedimiento carecen de justificación alguna, aspecto sobre el cual la Corte Interamericana ha sostenido que el exceso de trabajo no puede justificar la inobservancia del plazo razonable, que no es una ecuación racional entre volumen de litigios y número de tribunales, sino una referencia individual para el caso concreto, por lo que tales cuestiones, si bien se reconocen, ello no implica que deban gravitar sobre los derechos del gobernado, razonamientos que son extensivos no sólo a las autoridades jurisdiccionales, sino también a todas aquellas que tienen injerencia en trámites análogos.”[[2]](#footnote-2)*

***PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.*** *“En relación con el concepto de demora o dilación injustificada en la resolución de los asuntos, el artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, coincidente en lo sustancial con el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, establece que los tribunales deben resolver los asuntos sometidos a su conocimiento dentro de un plazo razonable, como uno de los elementos del debido proceso; aspecto sobre el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considerando lo expuesto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha establecido cuatro elementos o parámetros para medir la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales; y, d) la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. Además de los elementos descritos, el último de los tribunales internacionales mencionados también ha empleado para determinar la razonabilidad del plazo, el conjunto de actos relativos a su trámite, lo que ha denominado como el "análisis global del procedimiento", y consiste en analizar el caso sometido a litigio de acuerdo a las particularidades que representa, para determinar si un transcurso excesivo de tiempo resulta justificado o no. Por tanto, para precisar el "plazo razonable" en la resolución de los asuntos, debe atenderse al caso particular y ponderar los elementos descritos, conforme a criterios de normalidad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, para emitir un juicio sobre si en el caso concreto se ha incurrido en una dilación o retardo injustificado, ya que una demora prolongada, sin justificación, puede constituir, por sí misma, una violación a las garantías judiciales contenidas tanto en los aludidos artículos como en el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que el concepto de "plazo razonable" debe concebirse como uno de los derechos mínimos de los justiciables y, correlativamente, como uno de los deberes más intensos del juzgador, y no se vincula a una cuestión meramente cuantitativa, sino fundamentalmente cualitativa, de modo que el método para determinar el cumplimiento o no por parte del Estado del deber de resolver el conflicto en su jurisdicción en un tiempo razonable, se traduce en un examen de sentido común y sensata apreciación en cada caso concreto.”[[3]](#footnote-3)*

1. Por ello, este Organismo Garante, comprometido con la tutela de los derechos humanos confiados, señala que este exceso del plazo legal para resolver el presente asunto, resulta de carácter excepcional.
2. Finalmente, el **seis (06) de junio de dos mil veinticuatro**, la Comisionada Ponente decretó el cierre del periodo de instrucción, por lo que ordenó turnar el expediente para su resolución, misma que ahora se pronuncia; y ---------------------------------------------------

C **O N S I D E R A N D O**

## **PRIMERO. De la competencia**

1. Este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, es competente para conocer y resolver del presente recurso de conformidad con el artículo: 6, apartado A, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, párrafos trigésimo segundo, trigésimo tercero y trigésimo cuarto, fracciones IV y V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 1, 2 fracción II, 13, 29, 36 fracciones I y II, 176, 178, 179, 181 párrafo tercero y 185 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; y 7, 9 fracciones I y XXIV, y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

## **SEGUNDO. De la oportunidad y procedencia.**

1. El medio de impugnación fue presentado a través del SAIMEX**,** en el formato previamente aprobado para tal efecto y dentro del plazo legal de quince días hábiles otorgados; para el caso en particular, es de señalar que si el **SUJETO OBLIGADO** entregó respuesta el **once (11) de marzo de dos mil veinticuatro**, el plazo para interponer el recurso de revisión transcurrió del **doce (12) de marzo** al **nueve (09) de abril de dos mil veinticuatro**; sin contemplar en el cómputo los sábados, domingos y días inhábiles, en términos del artículo 3, fracción X, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.
2. De las constancias que obran dentro del expediente digital, formado en el SAIMEX, se aprecia que la **RECURRENTE** presentó su inconformidad el **once (11) de marzo de dos mil veinticuatro**; esto es, un día antes de que iniciara el plazo precitado, **circunstancia que no es determinante para declarar extemporaneidad**, toda vez que el tiempo concedido es para delimitar el término en que se puede impugnar las respuestas, luego entonces, no impide que se presente antes de iniciado el plazo concedido.
3. Al respecto, cabe señalar que cuando el medio de impugnación se haya interpuesto el mismo día en que se notificó la respuesta impugnada, resulta insuficiente para tener por extemporáneo el recurso de revisión de mérito, toda vez que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios sólo establece que este medio de defensa se ha de promover dentro de los 15 días hábiles siguientes en que se tenga conocimiento de la respuesta impugnada; sin embargo, no prohíbe que el recurso de revisión se presente el mismo día en que ésta fue notificada. Por lo que es de señalar que, en aras de privilegiar el derecho de acceso a la información, se entrará al estudio del presente recurso de revisión sin que la fecha en que se presentó afecte la resolución.
4. Discernimiento de este Órgano Garante que se robustece con la jurisprudencia número 1a./J. 41/2015 (10a.), Décima Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 569, libro 19, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del mes de junio de 2015, cuyo rubro y texto disponen:

***RECURSO DE RECLAMACIÓN. SU INTERPOSICIÓN NO ES EXTEMPORÁNEA SI SE REALIZA ANTES DE QUE INICIE EL PLAZO PARA HACERLO.*** *“Conforme al artículo 104, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el recurso de reclamación podrá interponerse por cualquiera de las partes, por escrito, dentro del término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución impugnada. Ahora bien, dicho numeral sólo refiere que el aludido medio de defensa no puede hacerse valer después de tres días, por tanto, no impide que el escrito correspondiente se presente antes de iniciado ese término. De ahí que si dicho recurso se interpone antes de que inicie el plazo para hacerlo, su presentación no es extemporánea.”*

1. Esto es así porque, en primer lugar, es necesario que la **RECURRENTE** conozca el acto que le provoca agravio y, a partir de ahí, formular su recurso de revisión señalando tanto el acto impugnado como el motivo de inconformidad. Y si bien la Ley señala que el plazo corre un día después de haber sido notificada la respuesta, en nada se afecta al proceso que el mismo día de ser notificada, la **RECURRENTE** actúe, ya que, por el contrario, lo que demuestra es el interés de éste para ejercer su derecho bajo el principio constitucional de justicia expedita.
2. Por lo que la presentación del recurso de revisión el mismo día del conocimiento de la respuesta, se insiste, no constituye un acto que altere el procedimiento, solo permite su gestión de manera rápida, lo que no afecta ningún principio procesal y es protector del derecho de acceso a la justicia pronta y expedita.
3. Así, la interposición del recurso de revisión antes de que inicie el plazo para su presentación no es determinante para declararlo extemporáneo, siempre y cuando ello ocurra de manera posterior a que se haya notificado la respuesta del **SUJETO OBLIGADO** -tal como ocurre en el presente asunto-.
4. Consecuencia de lo anterior, este Órgano Garante advierte que el escrito contiene las formalidades previstas por el artículo 180, último párrafo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, por lo que es procedente que este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, conozca y resuelva el presente recurso.

**TERCERO. Del planteamiento de la *Litis*.**

1. Se requirió la copia de un Certificado Parcelario, con número específico y que ampara una parcela ubicada en el Ejido de San Jerónimo Bonchete. El **SUJETO OBLIGADO** se manifestó incompetente para poseer la información y, orientó a la particular a dirigir su solicitud ante el Registro Agrario Nacional.
2. La particular impugnó la respuesta del **SUJETO OBLIGADO**, mediante el recurso de revisión con número indicado al rubro, y en el que señaló por agravios, esencialmente, la falta de respuesta escrita.
3. En ese sentido, este Órgano Garante advierte que las razones o motivos de inconformidad manifestados por el **RECURRENTE** sugieren que la respuesta proporcionada por el **SUJETO OBLIGADO** no cumplió con los principios contenidos en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, los cuales señalan que en la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar que ésta sea **congruente**.
4. Por lo anterior, la *Litis* a resolver en el presente recurso se circunscribe en determinar si la respuesta del **SUJETO OBLIGADO** colma el derecho de acceso a la información ejercido por el **RECURRENTE** o, si por el contrario, se actualizan las causales de procedencia del recurso de revisión establecidas en el artículo 179 fracciones IV y/o VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios[[4]](#footnote-4).

## **CUARTO. Estudio y Resolución del asunto.**

### I. De la atención a la solicitud de información.

1. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en su artículo 150, establece que **el procedimiento de acceso a la información es la garantía primaria del derecho en cuestión y se rige por los principios de** simplicidad, rapidez gratuidad del procedimiento, **auxilio y orientación a los particulares**, así como atención adecuada a las personas con discapacidad y a los hablantes de lengua indígena con el objeto de otorgar la protección más amplia del derecho de las personas.
2. Para atender las solicitudes de información, los Sujetos Obligados contarán con un área denominada **Unidad de Transparencia**[[5]](#footnote-5), la cual será presidida por un Titular, quien fungirá como enlace entre éstos y los solicitantes. Dicha Unidad **será la encargada de tramitar internamente la solicitud de información** y tendrá la alta responsabilidad de verificar, en cada caso, que la misma no sea confidencial o reservada. Asimismo, contará con las facultades internas necesarias para **gestionar la atención a las solicitudes de información** en los términos de la Ley General y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios[[6]](#footnote-6).
3. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, las Unidades de Transparencia tendrán, entre sus atribuciones, las siguientes:
   1. Recibir, tramitar y dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información;
   2. Realizar, con efectividad, los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la información;
   3. Entregar, en su caso, a los particulares la información solicitada; y
   4. Efectuar las notificaciones a los solicitantes.
4. Otros sujetos del proceso de atención a las solicitudes de información son los **servidores públicos habilitados**, quienes serán designados por el titular del **SUJETO OBLIGADO**, a propuesta del responsable de la Unidad de Transparencia[[7]](#footnote-7) y tendrán, entre sus atribuciones, las siguientes[[8]](#footnote-8):
   1. Localizar la información que le solicite la Unidad de Transparencia; y
   2. Proporcionar la información que obre en los archivos y que le sea solicitada por la Unidad de Transparencia.
5. De tal manera que cada una de las áreas administrativas del **SUJETO OBLIGADO** deberá contar con un servidor público habilitado, quien será, a su vez, el enlace entre la Unidad de Transparencia y el área administrativa, y se encargará de buscar, localizar y proporcionar la información que se requiera a través de las solicitudes de acceso a la información.
6. Una expuesto lo anterior, de la lectura a la solicitud de información **00019/FELIPRO/IP/2024** y, como fuera señalado en el *Planteamiento de la Litis* de esta resolución, se advierte que la entonces **SOLICITANTE** requirió acceder a la siguiente información:
   1. Copia del Certificado Parcelario que ampara una parcela específica ubicada en el Ejido de San Jerónimo Bonchete.
7. Así, a través del acuse digital de respuesta a la solicitud de información **00019/FELIPRO/IP/2024**, el **SUJETO OBLIGADO** informó lo siguiente:

*“En seguimiento y atención de su petición, presentada mediante el Sistema de Control de Solicitudes de Información del Estado de México (SAIMEX). Con fundamento en el artículo 12 y 167 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, a su pedimento me permito informarle que usted puede obtener el documento que solicita a través del Registro Agrario Nacional, puede consultar los requisitos y procesos del tramite en el siguiente link: https://www.gob.mx/tramites/ficha/solicita-ante-el-ran-la-reposicion-de-tus-certificado-en-caso-de-la-perdida-o-extravio/RAN2342 Así mismo, informarle que este ayuntamiento no emite dicha información. Con base en lo anterior reciba un cordial saludo.”* (Sic)

1. De la transcripción referida *supra*, podemos rescatar los siguientes elementos:
   1. Que el **SUJETO OBLIGADO** se manifestó incompetente para poseer, generar o administrar lo solicitado; por ello, orientó a la entonces **SOLICITANTE** a dirigir su solicitud al Registro Agrario Nacional.
   2. Aunado a lo anterior, en seguimiento a los principios de auxilio y orientación a los particulares, el **SUJETO OBLIGADO** compartió una dirección electrónica ([*https://www.gob.mx/tramites/ficha/solicita-ante-el-ran-la-reposicion-de-tus-certificado-en-caso-de-la-perdida-o-extravio/RAN2342*](https://www.gob.mx/tramites/ficha/solicita-ante-el-ran-la-reposicion-de-tus-certificado-en-caso-de-la-perdida-o-extravio/RAN2342)*)* donde la particular podría solicitar la reposición del certificado.
2. En acompañamiento a lo anterior, el **SUJETO OBLIGADO** adjuntó un archivo electrónico, titulado ***“null.pdf”***, consistente en una foja en blanco, sin ningún tipo de información.
3. Por su parte, la particular impugnó la respuesta del **SUJETO OBLIGADO**, mediante el recurso de revisión **01373/INFOEM/IP/RR/2024**, en el que señaló por agravios, los siguientes:
   1. Que no se le entregó ninguna respuesta escrita.
4. Razón de lo anterior, se procederá a analizar la naturaleza de lo solicitado, así como el marco legal de competencia del **SUJETO OBLIGADO** para poseer, generar y/o administrar la información.

### II. Del Ayuntamiento de San Felipe del Progreso.

1. Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los estados que integran a nuestro país, adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el **municipio libre**[[9]](#footnote-9). Al respecto, cada municipio será gobernado por un **Ayuntamiento** de elección popular directa, integrado por un **Presidente o Presidenta Municipal** y el número de **regidurías** y **sindicaturas** que la ley determine, de conformidad con el principio de paridad[[10]](#footnote-10).
2. En seguimiento al mandato constitucional, la Ley Orgánica Municipal del Estado de México señala que cada municipio será gobernado por un **ayuntamiento** de elección popular directa y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado[[11]](#footnote-11).
3. Los **ayuntamientos** se renovarán cada tres años, e iniciarán su periodo el uno (01) de enero del año inmediato siguiente al de las elecciones municipales ordinarias y, concluirán el treinta y uno (31) de diciembre del año de las elecciones para su renovación; así mismo, se integrarán de la siguiente forma[[12]](#footnote-12):
   1. Un presidente, **un síndico** y cuatro regidores, electos por planilla según el principio de mayoría relativa, y tres regidores designados según el principio de representación proporcional, cuando se trate de municipios que tengan una población de menos de 150 mil habitantes.
   2. Un presidente, **un síndico** y cinco regidores, electos por planilla según el principio de mayoría relativa, y cuatro regidores designados según el principio de representación proporcional, cuando se trate de municipios que tengan una población de más de 150 mil habitantes y menos de 500 mil habitantes.
   3. Un presidente, **un síndico** y siete regidores, electos por planilla según el principio de mayoría relativa; un síndico y cinco regidores designados según el principio de representación proporcional, cuando se trate de municipios que tengan una población de más de 500 mil habitantes.
4. Al ser órganos deliberantes, los **ayuntamientos** deberán los asuntos de su competencia de forma colegiada[[13]](#footnote-13). Para ello, sesionarán, cuando menos, una vez cada ocho días en Sesión Ordinaria o, cuantas veces sea necesario en asuntos de urgente resolución, por medio de Sesiones Extraordinarias, a petición de la mayoría de sus miembros y podrán declararse en sesión permanente cuando la importancia del asunto lo requiera[[14]](#footnote-14).
5. Así las cosas, para el despacho, estudio y planeación de los diversos asuntos de la administración municipal, el ayuntamiento contará por lo menos con las siguientes dependencias[[15]](#footnote-15):
   1. La secretaría del ayuntamiento;
   2. La tesorería municipal.
   3. La Dirección de Obras Públicas o equivalente.
   4. La Dirección de Desarrollo Económico o equivalente.
   5. La Dirección de Desarrollo Urbano o equivalente;
   6. La Dirección de Ecología o equivalente.
   7. La Dirección de Desarrollo Social o equivalente.
   8. La Coordinación Municipal de Protección Civil o equivalente.
   9. La Dirección de las Mujeres o equivalente.
   10. Dirección del Campo o equivalente, preferentemente en los municipios cuyas características geográficas, territoriales, sociales, culturales, políticas y económicas sean predominantemente inherentes al ámbito rural.
6. Ahora bien, la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, en su artículo 12, establece que los municipios controlarán y vigilarán, coordinada y concurrentemente con el Gobierno del Estado, la **utilización del suelo** en sus jurisdicciones territoriales, en los términos de la ley de la materia y los Planes de Desarrollo Urbano correspondientes.
7. Por su parte, el diverso 96 Sexies, señala que la o el Titular de la **Dirección de Desarrollo Urbano** tendrá, entre sus atribuciones, vigilar la utilización y aprovechamiento del suelo con fines urbanos, en su circunscripción territorial; y, analizar las **cédulas informativas de zonificación**, **licencias de uso de suelo** y **licencias de construcción**.
8. Mientras que la o el **Titular del Campo**, o equivalente, se encargará de **fomentar el desarrollo rural** de las actividades agrícolas, pecuarias, acuícolas, forestales, pesquera, agroindustriales, y de la sanidad por acuerdo del ayuntamiento en coordinación con las autoridades estatales y federales correspondientes, establecidas en la ley de la materia; así como realizar la programación y ejecución de asesorías y servicios relacionados[[16]](#footnote-16).
9. En razón de lo anterior, se concluye que los ayuntamientos cuentan con competencia para coordinar y vigilar la **utilización del suelo** en sus jurisdicciones territoriales, empero, ello es únicamente aplicable respecto a las zonas urbanas y rurales; pues, como se ha establecido, las zonas ejidales son reguladas por lo dispuesto por el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Agraria y demás ordenamientos aplicables.

### III. Del Registro Agrario Nacional.

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su numeral 27, señala que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.
2. Más adelante, en su fracción VII, reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas; así mismo, se establece que la Ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas.
3. Para efectos de lo anterior, y considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades, **la Ley** protegerá la tierra para el asentamiento humano y **regulará el aprovechamiento de tierras**, bosques y aguas de uso común y la provisión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores.[[17]](#footnote-17)
4. Por otro lado, se reconoce la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos[[18]](#footnote-18). Sin embargo, se establece que la Ley regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela; así mismo, establecerá los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí, con el Estado o con terceros y otorgar el uso de sus tierras; y, tratándose de ejidatarios, transmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del núcleo de población; igualmente fijará los requisitos y procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgará al ejidatario el dominio sobre su parcela[[19]](#footnote-19).
5. En seguimiento al mandato constitucional, se crea la Ley Agraria, la cual replica que los núcleos de población ejidales o ejidos tienen personalidad jurídica y patrimonio propio y son propietarios de las tierras que les han sido dotadas o de las que hubieren adquirido por cualquier otro título[[20]](#footnote-20).
6. Los ejidos operarán de acuerdo con su reglamento interno, sin más limitaciones en sus actividades que las que dispone la Ley Agraria[[21]](#footnote-21). Su reglamento se inscribirá en el **Registro Agrario Nacional**, y deberá contener las bases generales para la organización económica y social del ejido que se adopten libremente, los requisitos para admitir nuevos ejidatarios, las reglas para el aprovechamiento de las tierras de uso común, así como las demás disposiciones que conforme a la Ley de mérito deban ser incluidas en el reglamento y las demás que cada ejido considere pertinentes[[22]](#footnote-22).
7. Por otro lado, se reconoce que cada ejido contará con tres órganos, a saber[[23]](#footnote-23):
   1. La **asamblea**, como órgano supremo y en la que participan todos los ejidatarios[[24]](#footnote-24).
   2. El **comisariado ejidal**, encargado de e la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido[[25]](#footnote-25); y
   3. El **consejo de vigilancia**, supeditado a vigilar que los actos del comisariado se ajusten a los preceptos de la ley y, de revisar las cuentas y operaciones del comisariado a fin de darlas a conocer a la asamblea y denunciar ante ésta las irregularidades en que haya incurrido el comisariado[[26]](#footnote-26).
8. Para efectos de la Ley Agraria, las tierras ejidales, por su destino, se dividirán en tres grupos, a saber[[27]](#footnote-27):
   1. Tierras para el asentamiento humano;
   2. Tierras de uso común; y
   3. **Tierras parceladas**.
9. Ahora bien, para el control de la tenencia de la tierra y la seguridad documental derivados de la aplicación de la Ley Agraria, funcionará el **Registro Agrario Nacional**, en el que se inscribirán los documentos en que consten las operaciones originales y las modificaciones que sufra la propiedad de las tierras y los derechos legalmente constituidos sobre la propiedad ejidal y comunal[[28]](#footnote-28).
10. El **Registro Agrario Nacional** será público y cualquier persona podrá obtener información sobre sus asientos e inscripciones y obtener, a su costa, las copias que solicite[[29]](#footnote-29). De conformidad con lo establecido por el artículo 152 de la Ley Agraria, se deberán inscribir en el **Registro Agrario Nacional**:
    1. Todas s las resoluciones judiciales o administrativas que reconozcan, creen, modifiquen o extingan derechos ejidales o comunales;
    2. **Los certificados o títulos que amparen derechos sobre solares, tierras de uso común y parcelas de ejidatarios o comuneros**;
    3. Los títulos primordiales de las comunidades y, en su caso, los títulos que las reconozcan como comunidades tradicionales;
    4. Los planos y delimitación de las tierras a que se refiere el artículo 56 de la Ley;
    5. Los planos y documentos relativos al catastro y censo rurales;
    6. Los documentos relativos a las sociedades mercantiles;
    7. Los decretos de expropiación de bienes ejidales o comunales; y
    8. Los demás actos y documentos que disponga la Ley, sus reglamentos u otras leyes.

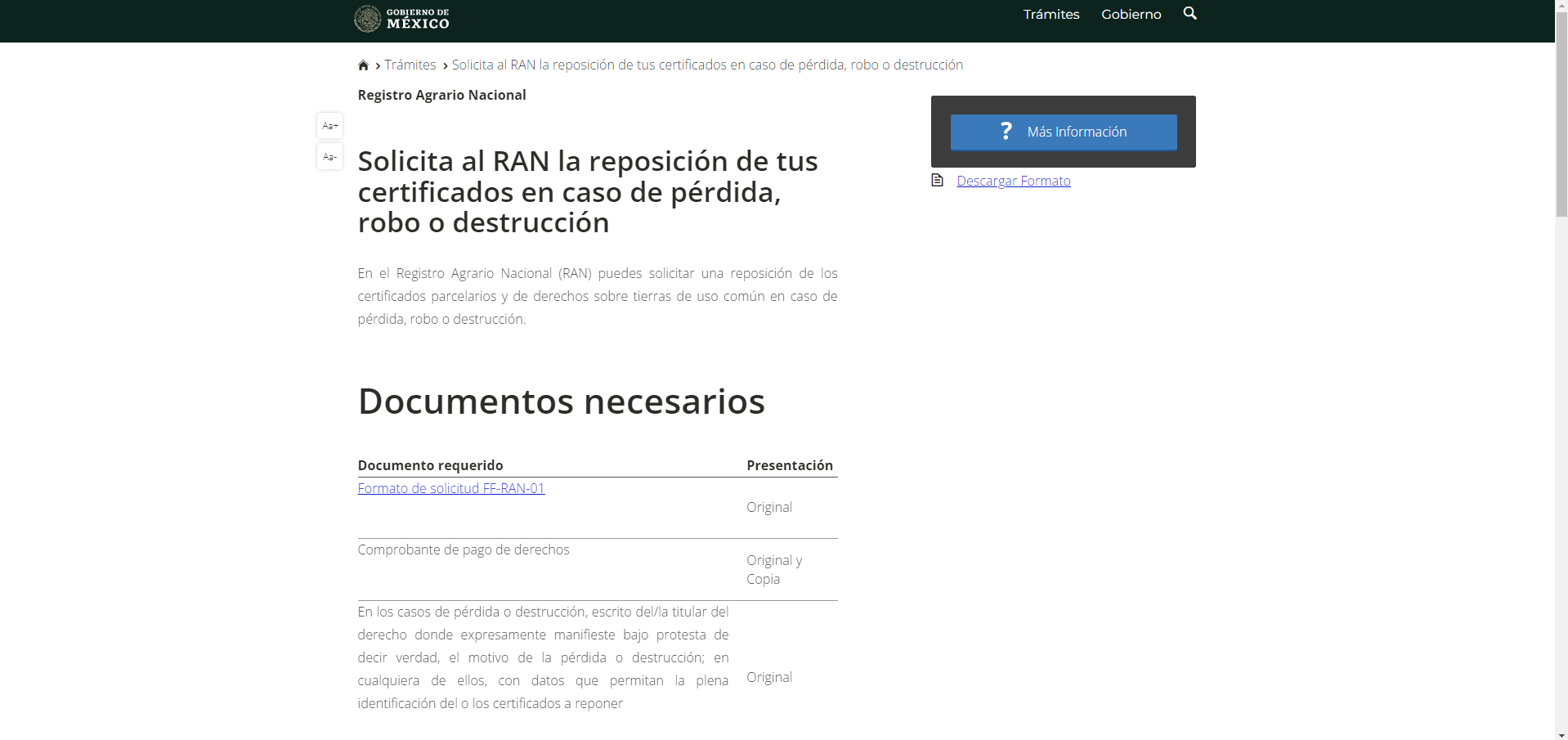
### IV. De la manifestación de incompetencia.

1. A lo largo del estudio, hemos establecido el procedimiento que deben seguir los Sujetos Obligados a fin de otorgar una adecuada atención a las solicitudes de información; sin embargo, en los casos que se actualice una notoria incompetencia, el procedimiento se acorta de sobremanera.
2. Al respecto, el artículo 167 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, establece lo siguiente:

*“****Artículo 167.*** *Cuando las unidades de transparencia determinen la notoria incompetencia por parte de los sujetos obligados, dentro del ámbito de aplicación, para atender la solicitud de acceso a la información, deberán comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días hábiles posteriores a la recepción de la solicitud y, en su caso orientar al solicitante, el o los sujetos obligados competentes.*

*(…)”*

1. De lo anterior se colige que, cuando la Unidad de Transparencia reciba una solicitud de información, y ésta determine una notoria incompetencia, deberá hacerlo del conocimiento del Solicitante dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha de presentación.
2. En el presente asunto, de las constancias que obran dentro del expediente digital formado en el SAIMEX, se advierte que la solicitud de información **00019/FELIPRO/IP/2024** se presentó el siete (07) de marzo de dos mil veinticuatro, mientras que la Unidad de Transparencia manifestó su incompetencia el once (11) de marzo de dos mil veintidós; esto es, al **segundo** día hábil posterior a la presentación. Por lo tanto, se concluye que la manifestación de la Unidad de Transparencia se externó durante el plazo establecido en la Ley de la materia.
3. No debe omitirse que la **RECURRENTE** señaló, dentro del recurso de revisión **01373/INFOEM/IP/RR/2024**, que la respuesta del **SUJETO OBLIGADO** le causaba agravio porque “*no entregó ninguna respuesta escrita”*.
4. Empero, contrario a los motivos de inconformidad externados por la particular, y de acuerdo con lo establecido en el apartado de *Antecedentes*, así como el **punto I** del presente estudio, se advierte que si bien es cierto que el **SUJETO OBLIGADO** entregó un documento completamente en blanco, denominado ***“null.pdf”***, también lo es que, en el acuse de respuesta, el **SUJETO OBLIGADO** hizo del conocimiento de la particular que **el Ayuntamiento de San Felipe del Progreso no emitía la información solicitada**.
5. Aunado a lo anterior, se advierte que el **SUJETO OBLIGADO** señaló a la particular que podría solicitar el documento al Registro Agrario Nacional y, para tal efecto, compartió una dirección *web[[30]](#footnote-30)* con la cual acceder al portal oficial del Gobierno Federal, en un apartado dedicado a proveer información para solicitar la reposición de los **certificados parcelarios** y de derechos sobre tierras de uso común, ante el **Registro Agrario Nacional**. Se adjunta a continuación un fragmento del portal de mérito como referencia:



1. Consecuencia de lo anterior, se dejan a salvo los derechos del **RECURRENTE** a fin de que, de considerarlo idóneo a sus intereses, presente su solicitud de información al Registro Agrario Nacional, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia[[31]](#footnote-31) (PNT).
2. Luego entonces, este Organismo Garante concluye conforme a derecho el **confirmar** la respuesta otorgada a la solicitud de información **00019/FELIPRO/IP/2024**.

## **SEXTO. Decisión.**

1. A lo largo del presente estudio, se identificó el marco de competencia de los ayuntamientos, con respecto al control y vigilancia de las zonas urbanas y rurales establecidos en sus respectivas demarcaciones. Por otro lado, se estableció que los núcleos de población ejidales estaban regulados por las disposiciones establecidas en el artículo 27, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Agraria.
2. Por lo tanto, en consecuencia y en mérito de lo expuesto en líneas anteriores, resultan infundadas las razones o motivos de inconformidad hechos valer por la **RECURRENTE** dentro del recurso de revisión **01373/INFOEM/IP/RR/2024**; por ello, y con fundamento en la fracción II del numeral 186 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se **CONFIRMA** la respuesta a la solicitud de información número **00019/FELIPRO/IP/2024**.
3. Por lo anteriormente expuesto y fundado, este **ÓRGANO GARANTE** emite los siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

**R E S O L U T I V O S**

**PRIMERO.** Resultan infundadas lasrazones o motivos de inconformidad hechos valer en el recurso de revisión **01373/INFOEM/IP/RR/2024,** en términos del **Considerando** **CUARTO** de la presente resolución.

**SEGUNDO.** Se **CONFIRMA** la respuesta emitida por el **Ayuntamiento de San Felipe del Progreso**, a la solicitud **00019/FELIPRO/IP/2024.**

**TERCERO.** **REMÍTASE,** vía Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), la presente resolución a la Titular de la Unidad de Transparencia del **SUJETO OBLIGADO.**

**CUARTO.** Notifíquese a la **RECURRENTE** la presente resolución vía Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX).

**QUINTO.** Se hace del conocimiento de la **RECURRENTE** que, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en caso de que considere que la resolución le cause algún perjuicio podrá impugnar vía juicio de amparo en los términos de las Leyes aplicables.

ASÍ LO APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS; MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA; SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ; LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA; EN LA VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIECINUEVE (19) DE JUNIO DE DOS MIL VEINTICUATRO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO ALEXIS TAPIA RAMÍREZ.

1. “*El artículo 17 de la Constitución consagra la garantía denominada derecho a la jurisdicción que consiste, conforme al texto literal del precepto, en que "toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial" lo que significa, por regla general, que un funcionario judicial actúa indebidamente cuando incurre en dilaciones que lo llevan a vulnerar esos dispositivos al no acordar las promociones de las partes o emitir las resoluciones dentro de los términos específicos que para cada situación señalan las normas procesales aplicables. De ello se sigue que si se formula una queja administrativa con motivo de esas irregularidades y el funcionario admite que incurrió en ellas o las mismas se encuentran probadas, en principio, debe considerarse fundada la queja e imponer las correcciones disciplinarias que correspondan o adoptar medidas que se juzguen convenientes. Sin embargo, al examinar cada caso se debe considerar que el legislador al fijar términos procesales en las leyes respectivas no pudo atender a la variada gama de casos que se someten a los tribunales, tanto por la índole de las cuestiones jurídicas que se controvierten como por la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente y la extensión de los escritos aportados y pruebas desahogadas. Por la naturaleza del problema resulta lógico inferir que el legislador, al hacer la determinación a que se alude tomó en cuenta, por una parte, el tiempo que previsiblemente, considerando la capacidad y diligencia medias de un juzgador y de su personal profesional y administrativo de apoyo, se requiere para acordar o resolver la generalidad de los asuntos que ingresan a los órganos jurisdiccionales y, por otra, a que este ingreso sea en número proporcionado a la potencialidad de trabajo del juzgado o tribunal que corresponda. Por todo ello cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que o bien se presentaron atenuantes o bien, excluyentes de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario contra el que se formuló la queja administrativa y resolverla en consecuencia.*” [↑](#footnote-ref-1)
2. Consultable en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002351. [↑](#footnote-ref-2)
3. Consultable en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002350. [↑](#footnote-ref-3)
4. *“****Artículo 179.*** *El recurso de revisión es un medio de protección que la Ley otorga a los particulares, para hacer valer su derecho de acceso a la información pública, y procederá en contra de las siguientes causas:*

   *(...)*

   ***IV.*** *La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;*

   *(…)*

   ***VII.*** *La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información;*

   *(…)”* [↑](#footnote-ref-4)
5. Artículo 50, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. [↑](#footnote-ref-5)
6. Artículo 51, Ídem. [↑](#footnote-ref-6)
7. Artículo 58, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. [↑](#footnote-ref-7)
8. Artículo 59, Ídem. [↑](#footnote-ref-8)
9. Artículo 115, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. [↑](#footnote-ref-9)
10. Artículo 115, fracción I, Ídem. [↑](#footnote-ref-10)
11. Artículo 15, Ley Orgánica Municipal del Estado de México. [↑](#footnote-ref-11)
12. Artículo 16, Ídem. [↑](#footnote-ref-12)
13. Artículo 27, Ley Orgánica Municipal del Estado de México. [↑](#footnote-ref-13)
14. Artículo 28, Ídem. [↑](#footnote-ref-14)
15. Artículo 87, Ídem. [↑](#footnote-ref-15)
16. Artículo 96 Sexdecies, Ley Orgánica Municipal del Estado de México. [↑](#footnote-ref-16)
17. Artículo 27, fracción VII, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. [↑](#footnote-ref-17)
18. Ibídem. [↑](#footnote-ref-18)
19. Ibídem. [↑](#footnote-ref-19)
20. Artículo 9, Ley Agraria. [↑](#footnote-ref-20)
21. Artículo 10, Ídem. [↑](#footnote-ref-21)
22. Ibídem. [↑](#footnote-ref-22)
23. Artículo 21, Ley Agraria. [↑](#footnote-ref-23)
24. Artículo 22, Ídem. [↑](#footnote-ref-24)
25. Artículo 32,Ídem. [↑](#footnote-ref-25)
26. Artículo 36, Ley Agraria. [↑](#footnote-ref-26)
27. Artículo 44, Ídem. [↑](#footnote-ref-27)
28. Artículo 148, Ídem. [↑](#footnote-ref-28)
29. Artículo 151, Ídem. [↑](#footnote-ref-29)
30. https://www.gob.mx/tramites/ficha/solicita-ante-el-ran-la-reposicion-de-tus-certificado-en-caso-de-la-perdida-o-extravio/RAN2342 [↑](#footnote-ref-30)
31. Disponible en: https://www.plataformadetransparencia.org.mx/ [↑](#footnote-ref-31)